

Humanidad

**Revista Electrónica de Estudios Humanísticos
Universidad Luterana Salvadoreña**

No. 1 Julio-Diciembre de 2018

Coloquio

El flagelo de la corrupción en los gobiernos centroamericanos de las últimas décadas y los escenarios del futuro político

(Waldemar Urquiza, filósofo y cientista social, conversa con David Martínez Amador, politólogo mexicano especialista en temas de corrupción y crimen organizado en Centroamérica)

Waldemar Urquiza: Profesor David Martínez Amador, un gusto conversar con usted sobre la actual coyuntura centroamericana, centrándonos especialmente en la corrupción en los gobiernos de las últimas décadas y los posibles escenarios del futuro político, por supuesto, dando a nuestro análisis también el matiz particular de relacionar el ser con el deber ser.

Partiendo del hecho de que, obviamente, no hay ningún país de Centroamérica que haya estado exento de la corrupción gubernamental en las últimas décadas, diferenciándose únicamente en los alcances de la misma, cuéntenos, ¿cómo describe usted, de modo general, su propia escala de corrupción, desde Guatemala hasta Panamá?

David Martínez-Amador: Sin duda es una situación que revela un hecho muy grave: la calidad democrática en América Central no produjo democracias, ni estables, ni tampoco comprometidas con los valores de transparencia y rendición de cuentas. Posiblemente allí está la clave de esta discusión. Las transiciones a la democracia (aspecto abordado de forma tan profunda por los clásicos de la ciencia política) no fueron completas, no fueron exitosas del todo. Discutir el fracaso de las mismas nos obliga a reconocer que tanto por parte de los actores internacionales de tutela así como por parte de los actores políticamente relevantes la noción de democracia significa solamente urnas y jornada

electoral'. Es decir, una definición muy minimalista de democracia. La idea de entender que una democracia trasciende el aspecto procedimental, democracia es ante todo derechos, derechos de intimidad, derechos de expresión, derechos de locomoción y también, el derecho de fiscalizar a quien gobierna. No tiene sentido la democracia cual forma de gobierno si no se postula como aspecto fundamental que una de las pocas formas de invertir la relación de poder frente al Estado es la institucionalización de las capacidades de accountability horizontal y vertical del que tanto habló Guillermo O'donnell: si la transparencia y la rendición de cuentas son componentes de la democracia, entonces el ciudadano puede afectar los procesos políticos. Esto es precisamente, lo que en Centroamérica arribó bastante tarde y el indicador lo constituye simplemente las fechas en que los instrumentos de fiscalización (Ley de acceso universal a la información, mecanismos de rendición de cuentas etc..) son fechas bastantes recientes (posterior al año 2000).

La situación no es homogénea, en efecto los indicadores presentaban una Costa Rica bastante más percibida como transparente y un país como Guatemala completamente ahogado en la corrupción. Pero la diferencia es que, en los últimos 10 años Guatemala ha experimentado un proceso de fiscalización institucional a raíz de un mecanismo de cooperación internacional que concluyó con el arresto de un expresidente, una exvicepresidenta, un gabinete completo de gobierno. Costa Rica, hasta fecha reciente con el famoso caso del 'cementazo' ha comenzado a desenterrar sus propios esqueletos en relación a la corrupción: se han detenido fiscales, políticos, empresarios. Eso si no hay que olvidar que al menos un presidente costarricense fue procesado por corrupción en la década de los noventa. En El Salvador, el reciente proceso judicial contra el ex presidente Antonio Saca vuelve a poner el tema. Martinelli en Panamá etc.. y podemos seguir. Es difícil construir la escala en razón que, hay países con pocos escándalos de corrupción y eso puede significar simplemente que no hay mecanismos para fiscalizar (o nadie quiere usarlos) y hay países como Guatemala que viven de escándalo diario de corrupción pero es en razón de nuevos mecanismos implantados por Naciones Unidas. Los indicadores de medición de percepción de corrupción miden eso precisamente, la percepción ciudadana. Sin embargo, me parece que Guatemala y Honduras (las dos democracias más inestables del Triangulo Norte) son los países más corruptos. Y posiblemente, Costa Rica y Panamá (aún) tendrían mejores indicadores de transparencia.

¿Qué es aquí lo importante? Notar que el *ethos* democrático (parafraseando a Weber) no está completo si no hay la voluntad del Estado (y los actores estatales) para abrirse y ser transparentes.

Waldemar Urquiza: Sin duda alguna que, en Centroamérica no estamos en el mejor escenario político de la historia reciente, tanto gobiernos de derecha como de izquierda se han disputado el estatus del más corrupto. Precisamente, esto se ha visto con mayor

claridad en El Salvador, donde los gobiernos derechistas de Francisco Flores y Antonio Saca han sido desvelados en su trama de corrupción, existiendo también signos de lo mismo en los dos gobiernos que les precedieron; y, por el lado de la izquierda, el gobierno de Mauricio Funes, de acuerdo a las publicaciones que se han hecho sobre los detalles de las investigaciones realizadas hasta ahora por la Fiscalía General de la República, ha ido todavía más lejos que los anteriores, quedando por ver lo que nos digan futuras investigaciones sobre el actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que no presagia terminar como una administración limpia.

Usted omitió referirse a Nicaragua, imagino que debido a la falta de información fidedigna que se tiene sobre el desempeño del presidente Daniel Ortega en materia de administración de los recursos del Estado, dificultad que obviamente responde al férreo control que mantiene la familia Ortega-Murillo, sin dejar el mínimo margen de operación a las instancias fiscalizadores.

Frente a este panorama deplorable de las administraciones públicas de Centroamérica, no hay duda que las entidades que por Ley velan por los intereses públicos han de mostrar su competencia y eticidad en asumir de oficio la indagación del desempeño de las administraciones públicas de cada uno de los países centroamericanos. Obviamente, véase desde donde se quiera, el flagelo de la corrupción es el peor vicio para el buen desempeño de los gobernantes y uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social de estos países.

Profesor Martínez, yendo un poco más allá de lo que hemos dicho, cuéntenos cómo percibe las dimensiones que ha tomado la corrupción en los diversos países de Centroamérica, es decir, su extensión a nivel de los tres Órganos de gobierno, del sector empresarial y de la sociedad en general, de modo que nos permita ver los tentáculos que se han desplegado desde el poder político.

David Martínez-Amador: En lo referente al caso de Nicaragua hay que apuntar que en razón de las características tan particulares de dicho régimen híbrido, es difícil obtener los indicadores para definir el grado de corrupción. Lo cual quiere decir, que en efecto, por la falta de instrumentos que empoderen la transparencia, en razón del rol complicado con el cual opera la oposición y la falta de alternancia la corrupción está allí presente: lo que no se puede definir con exactitud (porque acceder al dato es complicado) es el grado de corrupción.

Regresando al tema. Las transiciones que iniciaron hace tres décadas han producido regímenes políticos completamente cooptados, ya sea por el crimen organizado, aparatos clandestinos, élites políticas de tipo *rent-seekers* o en el peor de los casos, una

combinación de los tres como claramente sucede en el caso guatemalteco. Es claro que el problema de raíz, el 'pecado original' en el proceso que evita la consolidación democrática y abre las puertas a la corrupción lo constituye el financiamiento electoral ilícito. Ante la carencia de controles efectivos, regulaciones electorales actualizadas y la nula voluntad política, resulta que el proceso para construir la lógica neo-corporativa y clientelar (el Estado que sirve al financista cual cliente) se desarrolla aquí. El parlamentario que ocupa el curul simplemente toma posesión con las 'manos amarradas'. El mismo proceso que diluye las reglas (la corrupción que estira la legalidad) aplicar al nombramiento de jueces, las plazas se venden, las ternas que eligen magistrados tienen el precio asignado: no digamos el hecho de elegir presidentes que deben su campaña al financiamiento oscuro razón por la cual durante su gestión harán todo lo posible para regenerar la inversión puesta en su persona. Aquí comienza el problema: la agenda del ejecutivo no prioriza los instrumentos de confiabilidad ni transparencia, no se empodera la publicación de información en los portales oficiales, los mecanismos para compra-venta de equipo no son utilizados por los contratistas de Estado, los proyectos de cooperación e inversión se ejecutan sin candados básicos y así, un sinfín de etcéteras. La lógica es perversa y se construye un aparente círculo sin salida donde la ciudadanía termina por 1) desencantarse de lo político, 2) deja de participar, 3) tolera la corrupción en tanto y cuanto el régimen de turno provea determinados beneficios (sobre todo en términos de flexibilidad fiscal, modernización del Estado, infraestructura). ¿Todo esto como inició? El rol de incidencia perversa que poseen los financistas de campaña, dígase si, el sector empresarial y el crimen organizado. Ninguna fórmula es más perversa para la salud democrática que el financiamiento electoral estrictamente compuesto de financiamiento de origen privado en un contexto donde los órganos electorales de fiscalización carecen de autonomía.

Waldemar Urquiza: En el caso de Guatemala y El Salvador, donde más se ha ahondado en la trama de la corrupción, los descubrimientos de las investigaciones de los Ministerios Públicos respectivos muestran que la corrupción no es un acto aislado de un presidente de la república, de un ministro, de un diputado o de cualquier otro funcionario público, es una compleja red construida con bastante ingenio, de forma parecida a cualquiera de las grandes estructuras delictivas que conocemos, es decir, a las relacionadas con el narcotráfico, al lavado de dinero y al crimen organizado; cuyos beneficios se distribuyen de acuerdo al peldaño que ocupan los participantes en la jerárquico de poder. Por eso mismo, adquiere grandes dimensiones en las diversas instancias del Estado. Y este será sin duda el modelo que se ha de seguir en los otros países de Centroamérica donde todavía no se ha indagado oficialmente la corrupción o al menos en toda su extensión.

En El Salvador, los reportes de la Fiscalía arrojan que, en el caso del ex-presidente Elías Antonio Saca y lo mismo se ha adelantado del ex-presidente Mauricio Funes, el cerebro del pulpo estaba en Casa Presidencial, luego los tentáculos se desplegaban entre los miembros

más allegados del gabinete de gobierno, extendiéndose hasta empleados de bajo rango; desde luego, teniendo una contraparte en la sociedad civil, los compadres que hacían la otra parte del trabajo, entre los cuales tenemos destacados empresarios, notables comunicadores de los diferentes medios, elocuentes analistas políticos, ilustrados directores de fundaciones, familiares y amigos, que han desempeñado el papel de lavadores de dinero, supuestos ejecutores de proyectos -amañados o ficticios-, testaferros y voceros pagados o que cobraban por callar o hablar bien del gobierno. Por supuesto, esto es todavía el núcleo básico de la corrupción, porque más allá del cual hay también otros roles todavía poco esclarecidos por las investigaciones cuyos actores sabemos que se han beneficiado y se benefician de diversas maneras, que van desde otorgamiento de concesiones -proyectos, compra de bienes y pago por servicios- siguiendo o no los procedimientos oficiales, no cobro y/o exención de impuestos, hasta la permisividad de algunas acciones que riñen con la legislación nacional, lo cual desde luego tendría que ser a cambio de algo.

En el Órgano Legislativo salvadoreño se desarrolla otra trama, a la cual no se ha entrado todavía de lleno, pero sabemos que hay diputados que se han enriquecido enormemente y no pueden justificar sus ingresos. En esto no se ha quedado atrás ni siquiera la misma Fiscalía General de la República, el ente encargado de la investigación del delito y promover su enjuiciamiento; pues, de sus filas sale el último caso que se está destapando en el país, se trata del ex fiscal general, Luis Martínez, cuya trama está resultando igualmente patética y repugnante.

Además, a lo dicho hay que agregar los negocios sucios que se han hecho desde la Presidencia en los gobiernos de derecha, por ejemplo, con el gobierno de Taiwán, brindando su reconocimiento o apoyo en organismos internacionales a cambio de enormes sumas de dinero para cuentas personales o del partido en el gobierno; en lo que hemos visto que han estado igualmente involucrados otros gobiernos del Istmo centroamericano; quedando por esclarecer también lo que está detrás del apoyo brindado por los gobiernos de izquierda (de El Salvador y Nicaragua) a Venezuela y lo que pueda haber de por medio en las nuevas relaciones abiertas con China continental, sin duda alguna la falta de transparencia esconderá ilícitos.

Por si esto fuera poco, todavía faltaría que añadir los negocios que se han dado entre funcionarios públicos y el narcotráfico, sobre lo cual se ha investigado algo, pero no lo suficiente, por lo que es una deuda que deben saldar los Ministerios Públicos para cumplir con sus funciones y recuperar credibilidad.

Profesor Martínez Amador, en esta breve reseña de la extensión del cáncer de la corrupción de alguna manera hemos referido también el *modus operandi* de sus

protagonistas, pero para ampliar la visualización de su proceder, descríbanos con sus palabras la metodología que han empleado los corruptos para lograr sus propósitos o al menos señale otros elementos que usted encuentra formando parte de la misma.

David Martínez-Amador: No se qué le parece la siguiente afirmación. Yo la veo muy reveladora y muy atractiva: En América Latina pasamos de los golpes de Estado a la hiper-corrupción como el vicio que deshace la capacidad de claramente consolidar las democracias. Los casos centroamericanos están de muestra, pero México, Argentina Brasil, Ecuador y Venezuela son otros ejemplos muy graves. El escándalo Odebrecht utilizó el mismo mecanismo (nótese, la misma técnica) para corromper todo un continente. Más que plantear mecanismos alternos, me parece que lo importante es desnudar el mecanismo central. La clave de todo se denomina nivel de baja consolidación institucional. Deliberadamente la clase política ha evitado profundizar y hacer madurar los instrumentos que ayudarían a evitar la corrupción así como combatir la corrupción. La práctica es bien sencilla, simplemente se necesita que los arquitectos de la política pública dejen las cosas a medias deliberadamente. Es decir, donde hay candados, quitarlos, y donde no hay, dejarlo así. Significa desregularizar los procesos de confiabilidad bajo el argumento de la eficiencia, significa también que los mecanismos de verificación y transparencia no son creados y, si existen, se les asigna escaso presupuesto. Le doy un ejemplo. Durante la administración del ex presidente guatemalteco Pérez Molina, los esfuerzos de la sociedad civil para cumplir con la revisión anual del ejercicio sugerido por CNUCC (Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción) no contaron con ningún apoyo institucional. El gobierno presentó su propio informe, separado de la sociedad civil. A nadie le sorprende entonces cuando nos enteramos a finales del 2015 de la corrupción rapaz de dicha administración política: Todos los mecanismos de transparencia que deberían ser autónomos y compuestos de perfiles técnicos fueron inteligentemente politizados, debilitados, maniatados y cooptados. Lo interesante es que dicho proceso fue en uso de la misma legalidad establecida. Es decir, la corrupción que carcome las incipientes democracias no va más por la vía de la fuerza y la ilegalidad sino en uso torcido y enfermizo de la legalidad. Claro, hay cuestiones obvias como partidas de gasto falsas, asignaciones cuestionables, cuentas en el extranjero, pero hay otro tipo de corrupción de cuello blanco que logra pasar porque los mecanismos que deberían detenerla nacieron débiles o nacieron muertos. Le pongo otro ejemplo, los portales de acceso público a la información y los portales para transparentar la asignación de concesiones estatales. Estos se utilizan, se coloca información, pero se 'simula' la buena fe. Cuando las auditorías se llevan a cabo resulta que todo es un acto simulado, una farsa, una máscara puesta sobre el actor. Ser demócrata significa creer cual principio de vida en el diálogo y la tolerancia. Pero también, significa ser transparente, ser humilde para rendir cuentas. A mí me parece que la región tiene problemas graves con las dos esferas sin duda alguna.

Waldemar Urquiza: Estoy de acuerdo con su análisis y ahí podría estar gran parte del origen de los males de las “democracias” centroamericanas que han sucumbido desde su mismo inicio en la corrupción. Por lo que, en buena medida han sido ensayos fallidos. En todo el proceso que va desde la misma elección de candidatos al interior de los partidos políticos, pasando por las campañas políticas (adelantadas y financiadas con dineros oscuros), las votaciones (compra de votos y anomalías en las urnas y en el conteo de los votos), hasta el desarrollo de la administración gubernamental, encontramos el virus de la corrupción. Y, por supuesto que, dadas las habilidades requeridas en este escenario revuelto, los protagonistas han ido llegando cual más sagaz y voraz. A juzgar por los casos de El Salvador y Guatemala, donde las investigaciones han avanzado más, los presidentes lejos de ser auténticos gobernantes han resultado ser grandes capos de las finanzas públicas y grandes mercaderes de los asuntos del Estado. Pero estos dos países no han de ser la excepción en Centroamérica, en Panamá ya han empezado a desvelar los tentáculos de la corrupción en el más alto nivel y desde luego habrá que esperar lo que se ponga al descubierto un día no lejano en Honduras y Nicaragua. Pero, obviamente, como usted lo señala, la corrupción es una pandemia que se ha extendido por todo el centro, sur y norte de América, no solo alentada por actores nacionales sino internacionales, como vemos que ha ocurrido con Odebrecht, Taiwán y no se diga el narcotráfico, entre otros.

En El Salvador, siempre se ha escuchado decir por todos lados que a la política se entra para “ver qué se agarra”, reflejando con ello que la predisposición a la corrupción, sobre todo el saqueo de los recursos públicos y el aprovechamiento del poder para los negocios ilícitos, es un rasgo incrustado en la cultura nacional. Desafortunadamente, nunca ha habido un esfuerzo significativo por convertir la política en un campo que requiera de profesionales idóneos, tanto con el dominio de las herramientas científicas necesarias como poseer una notoria calidad moral. Esto porque, a lo largo de nuestra historia como república, la política ha estado secuestrada por los partidos políticos que funcionan más como mafias.

Profesor Martínez Amador, ante esta vorágine de la corrupción, que siempre ha sido tan visible hasta por la mirada menos atenta, porque salta a la vista la suntuosidad y el aumento del patrimonio de los funcionarios públicos corruptos, ¿cómo evalúa la vigilancia ciudadana en cada uno de los países centroamericanos?

David Martínez-Amador: Muy mal. La cultura política cívica no ha terminado de cuajar en América Central, al punto que, suponer que estas ciudadanías creen absolutamente que la regla democrática es preferible a la violencia no se puede decir que sea un aspecto aceptado en su totalidad. Hay que mencionar además la práctica de los ‘mandatos que son cual cheques en blanco’, en donde la ciudadanía permite que el funcionario electo haga y deshaga a gusto si con eso resuelve alguna serie de problemas. Con todo lo

anterior dicho, sin duda alguna es claro que hacer de la transparencia y la rendición de cuentas un valor esencial de la práctica democrática centroamericana es muy complicado. Simplemente basta considerar la 'vejez' de los mecanismos institucionalizados de transparencia y fiscalización así cómo cuestionarse si estos instrumentos son conocidos así cómo utilizados por la ciudadanía. Es sin duda, una agenda muy nueva.

Hay otro aspecto que me parece provocador y además genera polémica en el debate sobre todo en el espectro de las izquierdas. Plantear que los movimientos sociales son un mecanismo útil de auditoría social. A mí me parece que, no es que no pueden colaborar, pero su alcance es limitado para monopolizar la actividad de auditoría social. Y dado entonces tal situación en la cual, las ciudadanía son apáticas, los movimientos sociales tienen un alcance limitado y las instituciones encargadas de la fiscalización horizontal no hacen su trabajo es que se ha llegado a la necesidad de construir mecanismos anti-corrupción provenientes de Naciones Unidas. Es decir, Centroamérica muestra cómo ante tal nivel de desesperación la única forma de reforzar la agenda anti-corrupción es recurriendo al sistema internacional. Me refiero en concreto al mecanismo de CICIG (Comisión Contra la Impunidad y Corrupción en Guatemala) y la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras). ¿Acaso esto no es un indicador en términos que, ni a nivel institucional ni a nivel de sociedad civil se puede consolidar la agenda anti-corrupción? Un enorme fracaso en razón de las capacidades de los componentes del sistema político. A mí me parece en definitiva que, sí lo es. Aclaro lo siguiente, esto no quiere decir que la sociedad civil no se exprese, pero, lograr procesar, lograr las sentencias y condenas parece requerir (al menos en los casos de Guatemala y Honduras) un apoyo artificial por parte de la cooperación internacional.

Waldemar Urquiza: Sin duda alguna, profesor Martínez Amador, la maduración política de las ciudadanía centroamericanas va a paso lento. No logran darse cuenta que los gobernantes pueden hacer y deshacer hasta donde los pueblos lo permiten, incluso contando con mecanismos legales establecidos. El problema ha estado en la falta de organización de la sociedad civil. En El Salvador, particularmente son algunas universidades, la Iglesia Católica y algunas fundaciones las que hacen esfuerzos serios por pronunciarse en situaciones límites, pero no lo suficiente para incidir significativamente. No han logrado conectar con las bases de la población y movilizarlas. En el caso de Nicaragua, la población se ha movilizad, pero la Iglesia no muestra la suficiente creatividad para liderar la elaboración de un proyecto político adecuado como alternativa viable; y los otros actores sociales, intelectuales y gremios, no parecen pintar nada relevante en el escenario político nacional. Honduras y Panamá tienen una sociedad civil escasamente beligerante, con esfuerzos aislados. Sin embargo, ya es hora de comprender que en cada uno de los países de Centroamérica gobierna un monstruo desenfrenado que solo puede ser enfrentado con esfuerzos colectivos bien organizados y planificados, para lo

cual se requiere de un liderazgo marcadamente ético e ilustrado, no cualquier caudillismo sin letras que pretenda remediar las cosas con el grito, el desahogo y la matonería.

Uno de los pasos necesarios a dar en lo sucesivo es reformar las instituciones del Estado en vista de restarles poder de decisión, trasladando la mayor cuota de control a la sociedad civil. Por ejemplo, en El Salvador, la Asamblea Legislativa elige una serie de cargos importantes, como al fiscal general, al presidente de la Corte de Cuentas, al procurador de los Derechos Humanos, al procurador general de la República y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los del Tribunal Supremo Electoral, entre otros, cuya labor se enturbia por la politización, a todas luces perjudicial para la sociedad, porque los partidos políticos no solo ponen candidatos que les son favorables sino que una vez electos la función a desempeñar queda condicionada al apoyo brindado por dichos partidos, de esa forma el ejercicio del cargo empieza y termina amañado. En buena lógica esta función electora debería correr a cuenta de las universidades, gremios de profesionales y de las iglesias de mayor notoriedad, al menos en cuanto exclusivamente sean las encargadas de presentar las candidaturas a la Asamblea Legislativa.

En fin, profesor Martínez Amador, para cerrar este coloquio, díganos ¿qué estrategia piensa que se debe trabajar a futuro para enfrentar la corrupción? ¿Es posible coordinar esfuerzos entre sociedad civil, entidades contraloras nacionales y comunidad internacional? ¿Cómo diseñaría usted la estructuración que debe darse entre estos tres tipos de actores sociales para un trabajo conjunto efectivo contra la corrupción y sobre todo procurando que los logros sean sostenibles, de otro modo no solo se repetiría el amaño sino que cada vez que se vuelva insoportable habría que recurrir a los organismos internacionales.

David Martínez-Amador: Precisamente, el punto. Yo me cuestionaría que pueda existir una ruta viable al problema cuando incluso notamos que la intervención de organismos internacionales no ha podido solventar la epidemia de corrupción. ¿Qué más puede hacerse? No tengo ninguna intención de dejar a los lectores con un amargo sabor de boca pero me parece que será necesario. Salgamos un poquito de Centroamérica. Veamos el caso reciente de México, que en comparación con Centroamérica tiene una institucionalidad más sólida, sobre todo a un nivel federal. Todos esos mecanismos de transparencia y confiabilidad construidos desde el inicio de la década 2000 (los primeros en la región mesoamericana) parecen –al menos en el papel– que han madurado. Y vea usted, México es el paraíso de la corrupción, incapaz de detectar las irregularidades de más de 19 gobernadores e incapaz de darle seguimiento al escándalo Odebrecht. Menciono el caso mexicano para descartar de entrada la respuesta en razón de *‘seguir consolidando los mecanismos necesarios’*. El caso mexicano prueba que se puede tener una arquitectura institucional bastante completa pero si nadie quiere usarla ¿de qué sirve? Entonces ¿cuál es la salida sin recurrir al respirador artificial? Todos los candidatos políticos ofrecen la

guerra contra la corrupción, pero sin mecanismos (o con pocos mecanismos) y, sin voluntad, de nada sirve. Volvamos al caso mexicano: El presidente electo ha cancelado la construcción del nuevo aeropuerto internacional (una obra multimillonaria) en razón del infinito número de irregularidades en el proyecto (además de un daño ecológico brutal). La reacción del sector empresarial y el mercado financiero fue convenientemente de 'pánico'. Pero el nuevo gobierno tiene un control en las cámaras (federales y locales) que le dará ventaja política para su cruzada anti-corrupción. ¿Qué quiero decir aquí? ¿Cuándo los intereses económicos sobre el proceso político son tantos –fomentando la corrupción- la única forma de combatirla es con un grado de centralismo político? Nótese que el control del partido del Presidente electo López Obrador le da control casi absoluto de la cámara. ¿Es esa la salida porque el consenso democrático (la buena fe) es débil frente al interés clientelar? La misma pregunta se hacía en la década de los noventa en América Latina con respecto a las denominadas reformas estructurales, si podían 'pasar' por vía del consenso o por las aplanadoras legislativas. Diferente temática (con implicaciones distintas) pero, el mismo dilema. Si a ello le agregamos que la experiencia en aquellos contextos que han recurrido al sistema internacional no ha sido del todo óptima porque estas comisiones internacionales requieren de la institucionalidad local para trabajar, ¿qué podemos hacer? Quizá estas experiencias a las que me refiero, que claramente establecen un modelo de democracia tutelada deben extender su experiencia más allá de la década de tutela para que al mismo tiempo que se combate la corrupción, se diseñe una arquitectura institucional sin incentivos perversos. Porque el punto es, ¿Cómo lograr que la ciudadanía tome un interés activo en esta agenda? Los indicadores de satisfacción democrática muestran que las ciudadanías están desencantadas con la democracia porque, se conecta la relación entre la capacidad del 'sistema para resolver' (*outputs* de administración pública) y la legitimidad de las instituciones democráticas. Pocos ciudadanos notan que la capacidad del Estado para proveer compensadores sociales y un nivel básico de dignidad está conectado directamente con el flagelo de la corrupción, y este análisis es difícil hacerlo cuando la prioridad es subsistir. Las ciudadanías responden en momentos críticos pero luego, no hay mucho que hacer ante la carencia de mecanismos. Y si no responden en momento críticos, el interés aparece cuando los resultados contra la corrupción toman lugar. Cosa que no sucede todos los días. Recetas para limitar el acto de corrupción y su impacto existen, ¿pero lo quiere escuchar la clase política? ¿Lo quiere entender la ciudadanía al momento de hacer el cálculo racional en las urnas? A mí me parece que en términos generales, no.

Waldemar Urquiza: Comparto con usted, profesor Martínez, la percepción de vislumbrar un panorama incierto en la búsqueda de una solución eficaz y sostenida de la corrupción en los países centroamericanos. Una coordinación de esfuerzos entre sociedad civil, instancias contraloras nacionales y comunidad internacional no es posible conseguirla a corto y quizá ni a mediano plazo. El liderazgo requerido para aglutinar esfuerzos no se vé

por ningún lado. Si bien podría imaginarse que emerja del seno de la Iglesia Católica y de las universidades de mayor prestigio, por el peso institucional que han logrado mantener en estos largos años de crisis, no vemos que aparezca. La lúcida visión política, la capacidad de lograr consensos y la valentía para asumir este desafío parecen no ser atributos de alguien en particular en la actualidad; sin embargo, creo que es de aquí desde donde se puede gestar un esfuerzo prometedor que avance aunque sea a paso lento. Veremos quien toma la iniciativa.

Lógicamente, el primer núcleo convergente de estos actores sociales, actuando con sabiduría y ética, lo primero que ha de hacer es crear el primer esbozo de un proyecto político que luego ha de lanzar al concurso de todos los ciudadanos y procurar el apoyo de la comunidad internacional. Teniendo claro el punto de partida y el punto de llegada no importará los matices que pueda experimentar en el camino.

Gracias, profesor Martínez-Amador por compartir con nosotros, con lucidez y valentía, su análisis sobre este colosal problema que podría ser la raíz de todos los males de la vida social de los países centroamericanos y, por igual, también de la mayor parte de los países del continente americano.